

Diálogos de la Red de Política de Seguridad

La pandemia y su afectación a la seguridad en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú

Desde hace siete años, la Red de Política de Seguridad reúne a académicos de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú para intercambiar información sobre seguridad entre expertos y centros académicos del Perú y sus cinco vecinos, a través de investigaciones conjuntas, publicaciones y eventos en materia de seguridad.

Durante la mañana del viernes 26 de febrero de 2021, los miembros del grupo se reunieron —vía Zoom— para evaluar los impactos que la pandemia ha tenido sobre la situación de seguridad en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Los miembros de la red dieron cuenta del amplio abanico de componentes de la seguridad multidimensional que, en adición a los problemas estructurales que ya existían, se han visto afectados por la pandemia.

Efectivamente, en el caso del *Perú*, se hizo referencia a la agudización de la crisis de seguridad ciudadana —con bandas criminales peruanas, colombianas y venezolanas enfrentándose encarnizadamente, la crisis política —marcada por un constante cambio de gobiernos y altos funcionarios, así como por una de las peores crisis económicas de Latinoamérica. Sin embargo, se resaltó el preocupante aumento del narcotráfico, la minería ilegal y la presencia de organizaciones criminales internacionales. En esa línea, el narcotráfico se caracterizó por el re-incremento de cultivos de hoja de coca y por una presencia fuerte de organizaciones criminales internacionales que han ingresado desde países vecinos. Esto se vincula al *efecto globo* por el que Estados como Colombia han llevado a cabo operaciones intensas de interdicción, erradicación de cultivos e incautación, medidas que contrastan con la falta de respuesta peruana, lo que sin duda determinará un incremento exponencial del narcotráfico en el Perú. Asimismo, el refloramiento de economías ilícitas incluyó a la minería ilegal, que se intensificó en toda la Amazonía debido al aumento del precio del oro. La migración también se torna en una arista a analizar teniendo en cuenta el ingreso irregular por las fronteras ecuatoriana y brasileña tanto de migrantes venezolanos como haitianos, aunque estos últimos, con interés principalmente de tránsito hacia Chile o EE.UU.

En *Colombia*, las inconsistencias en el plan de vacunación vienen generando malestar social. Primero, las medidas para evitar un segundo pico de contagios no fueron suficientes y, llegada la crisis —de casi 17 000 casos diarios— el gobierno nacional y los niveles subnacionales no coordinaron eficazmente. Esto, se suma al hecho de que la implementación del plan de vacunación se ha retrasado y adolece de falta de claridad e inconsistencias sobre los tiempos de ejecución. Por otra parte, han surgido problemas económicos como la caída del PBI y el aumento de los niveles de desempleo —especialmente en jóvenes y mujeres— y la polémica propuesta de reforma tributaria en la que se plantea ampliar el impuesto al consumo. En tercer lugar, los niveles de violencia e inseguridad ciudadana parecen haberse elevado: se están volviendo a cometer masacres y asesinatos de defensores de derechos humanos y, en aquellos territorios periféricos antes controlados por las FARC, hoy se expande el narcotráfico y la minería ilegal.

En cuanto a *Chile*, si bien las Fuerzas Armadas han sido desplegadas en el marco del estado de excepción, estas no han tenido un rol muy intrusivo y no han sido mal percibidas. Sin embargo, sí hay una situación importante de seguridad en la Araucanía frente a las demandas mapuches: se ha planteado la militarización, lo que, no obstante, podría implicar un riesgo de mayor agravamiento del problema. Ahora bien, en lo referido a la pandemia, se reconocieron los importantes avances en materia de vacunación, cuya exitosa campaña llevaría en el futuro próximo a la “inmunidad de rebaño”. En contraste, un aspecto preocupante es el manejo de la migración, mayoritariamente venezolana, a través de la frontera con Bolivia: la posición del gobierno de militarizar la zona y de abordar el problema como uno de seguridad nacional ha venido excluyendo, sin embargo, un enfoque de seguridad humana. Por otro lado, la pandemia acentuó los problemas de inequidad que dieron origen al estallido social de octubre de 2019 y que reforzó la convicción ciudadana en torno a la necesidad de un proceso constituyente. Al respecto, si bien la expresión del descontento se ha visto contenida por las cuarentenas, probablemente surgirán rebotes del estallido social en los próximos meses. Las novísimas mega elecciones, proyectadas para el 11 de abril de este año, podrían calmar la situación temporalmente. Sin embargo, existe el riesgo de que generen mayor frustración en el futuro. Por ejemplo, a pesar de que la elección de un gobernador regional podría aparentar descentralización, solo se trata de descentralización política, más no administrativa o económica.

Sobre la situación de *Ecuador*, hay tres crisis que parecen únicamente coyunturales, pero que en realidad tienen carácter estructural. En cuanto a la vacunación, hay certeza de que las dosis no han sido destinadas necesariamente a trabajadores de primera línea y ello refleja indicios de un carácter clientelas en ciertas esferas de la administración del Estado y la política pública ecuatoriana. Asimismo, la presión ejercida por Quito y Guayaquil para la compra de vacunas ha evidenciado el centralismo en el Ecuador. Además, existe incertidumbre sobre cómo los resultados electorales afectarán el plan de vacunación ya que los candidatos no han profundizado sobre cómo se desarrollará la vacunación, sino que solo emiten discursos declarativos.

Adicionalmente, se termina de vislumbrar un nuevo episodio de crisis carcelaria vinculada con el control del narcotráfico en el país. Estas crisis han demostrado la poca capacidad de respuesta del Estado ecuatoriano, que luego ha recurrido a delegar responsabilidades a los gobiernos locales o asignar más responsabilidades a fuerzas armadas en crisis carcelarias, medidas que no parecen estar acordes con un Estado de derecho.

La situación de la seguridad en *Brasil* se ha caracterizado por una crisis institucional en la política; por los efectos devastadores de la pandemia y el negacionismo frente a esta; por el aumento en la tenencia de armas por la población; así como por el desmantelamiento de la institucionalidad de lucha contra la corrupción. En cuanto a la crisis institucional, la política se ha militarizado: la presencia de militares como ministros de Estado es proporcionalmente mayor en Brasil que en Venezuela. Ello ha ido de la mano con una radicalización de la política y con discursos de odio. Más aún, el negacionismo respecto de la pandemia ha agravado la situación de radicalización. La covid-19 ha cobrado alrededor de 260 000 muertes en Brasil, ha colmado la capacidad máxima de su sistema de salud y ha puesto en evidencia la desigualdad social. Además, no hay más vacunas disponibles en el mercado y, respecto de las vacunas que ya se tienen, no ha existido un patrón transparente de distribución. Considerando que el ministro de salud es militar y que han existido sospechas de corrupción entre los militares que manejan fondos, las fuerzas armadas han ido perdiendo legitimidad. Un tercer problema es el aumento en la compra de armas por la ciudadanía: en el año 2020, la venta de armas aumentó en un 91%, alcanzando la cifra de 180 000 nuevas armas adquiridas, lo que ha sido alentado por el propio presidente Bolsonaro. Por último, en cuanto al desmantelamiento de la institucionalidad de lucha contra la corrupción, se han procurado cambiar normas que imponen límites a la corrupción y aquellas que la criminalizan, a lo que se suma la presión de ciertos sectores populares para cambiar algunos magistrados de la Corte Suprema que se opusieron a las decisiones del Ejecutivo, la misma que ha sido respaldada por el propio Bolsonaro, lo que implica una intimidación a las instituciones del Estado.

En resumen, varios componentes de la seguridad fueron afectados por los países sudamericanos mencionados: agravamiento de los problemas de seguridad ciudadana, de la seguridad democrática o institucional, incremento del narcotráfico y las mafias, rebrote de la minería ilegal, afectaciones a la seguridad humana y salud, reclamos de los privados sobre la gobernanza en cuanto a las vacunas, seguridad económica, militarización de la política, aumento de criminalidad organizada y venta de armas.

IDEI y KAS Perú. (2021, febrero). *Diálogos de la Red de Política de Seguridad. La pandemia y su afectación a la seguridad en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú*. Lima: Instituto de Estudios Internacionales (IDEI) y Fundación Konrad Adenauer en el Perú (KAS Perú).